

Emilio Silva Barrera

El trabajo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica

Será preciso, en primer lugar, situar el contexto sociopolítico, en el cual la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica está llevando a cabo su labor, intentando recuperar la memoria de nuestros antepasados; hombres y mujeres que recibieron con alegría la instauración en España de la Segunda República, la llegada de la primera democracia formal que ha existido en España, y que tras el golpe de Estado franquista del 18 de julio de 1936 fueron desaparecidos física y socialmente durante toda la dictadura y buena parte de nuestra recuperada democracia.

Hablar de cultura de la memoria en España es hablar de un trauma. Nuestra sociedad tiene una relación especialmente difícil con la historia de su Guerra Civil y su dictadura franquista. Un ejemplo claro: el 22 de noviembre de 2003 se cumplieron cuarenta años del asesinato de John F. Kennedy. Los medios de comunicación españoles se volcaron en el tema; incluso un canal de televisión de cobertura en todo el Estado emitió, durante esa semana, un reportaje diario exponiendo todas y cada una de las distintas teorías acerca del crimen. También hicieron lo mismo los suplementos semanales de los principales periódicos, tratando el aniversario del magnicidio cometido en la ciudad de Dallas como un acontecimiento de la máxima relevancia y trascendencia para nuestra sociedad.

Pero lo curioso es que dos días antes, el 20 de noviembre, se cumplía un nuevo aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. Se trataba del día en que los habitantes de mi país comenzaron a dejar de vivir en una dictadura. Pero esa semana, y ese día, ninguna televisión habló del tema, ningún semanario de información publicó un extenso reportaje, ningún suplemento dominical relató lo que había supuesto aquel acontecimiento, que había cambiado objetivamente la vida de millones de personas: nuestra vida. Tampoco hubo ninguna institución que

conmemorase la citada fecha. Apenas dos periódicos recogieron una protesta hecha por la asociación a la que represento, por el hecho de que los adeptos y nostálgicos del régimen franquista no pagaban en ese día la entrada para acceder al Valle de los Caídos, el mausoleo donde se encuentra enterrado el militar golpista, Francisco Franco, y que se mantiene y conserva, a día de hoy, con los impuestos de todos los españoles.

La primera pregunta que yo me hago, como ciudadano que trata de entender lo que ocurre a su alrededor, es ¿cómo es posible que tantos años después un acontecimiento de esas dimensiones siga permaneciendo conmemorativamente oculto, como si no hubiera existido? ¿Qué ha ocurrido para que no se celebre el final de uno de los períodos más oscuros de nuestra historia? ¿Por qué los españoles que se alegraron de la muerte del dictador y del final de su régimen no manifiestan públicamente el recuerdo de aquello que sintieron?

Desde el regreso de la democracia a nuestro país esa patológica y extraña relación sobre el pasado se mantiene. Durante años se nos ha querido hacer ver el proceso por el que la democracia volvió a España como algo ejemplar, exportable al resto del planeta. Yo jamás me podría sentir orgulloso de ese proceso político hecho en mi país: una transición que dejó a más de 30.000 hombres y mujeres en las cunetas, desaparecidos física, social e históricamente; personas que murieron por defender la democracia, por perseguir una sociedad más justa y que no han tenido derecho ni a una sepultura digna, ni a un buen nombre, en un país donde todavía hoy existen numerosos monumentos y calles dedicados a los militares golpistas, que junto a Franco iniciaron el exterminio de una forma de ver el futuro del país, incluidos a miles de hombres y mujeres que portaban, difundían y defendían esas ideas.

El proceso por el que la sociedad española abandonó la dictadura franquista está siendo estudiado en todo el mundo. La misma palabra «transición» ocultaba (y aún lo hace) un hecho histórico especialmente relevante: que durante los años de la Segunda República había existido en España una democracia, desde que en noviembre de 1933 los hombres y las mujeres pudieron elegir a sus máximos representantes políticos en unas elecciones con sufragio universal. Por tanto, cuando murió el dictador, la sociedad española se adentró en un proceso de recuperación de la democracia; pero las elites políticas que bautizaron aquel proceso como una simple transición, estaban construyendo una ruptura,

un olvido de la primera democracia que pudo disfrutar nuestro país, al no definirlo como una transición para recuperar la democracia.

Numerosos sociólogos y politólogos españoles han intentado en estos años debatir acerca de cuándo ha terminado la transición española. Unos dicen que fue con la gran manifestación celebrada tras el golpe de Estado de febrero de 1981; otros la consideran liquidada cuando el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtuvo la victoria en unas elecciones generales, alcanzando el poder una fuerza política que había sido clandestina durante la dictadura; otros aseguran que fue la victoria del Partido Popular (PP), en marzo de 1996, lo que permitió acceder al Gobierno a una derecha elegida democráticamente. Lo que sí parece claro, haya terminado o no la transición, es que ha dejado numerosas cuentas pendientes, que tiene mucho que ver con cómo y quién diseñó ese proceso político y lo que se quiso lograr con ello.

El 14 de octubre de 1977, en el Congreso de los Diputados, se aprobó la Ley de Amnistía. Dos de los partidos que la votaron fueron el PSOE y el Partido Comunista de España (PCE), que públicamente se manifestaron entusiasmados con su aprobación. Ante la sociedad española la ley se presentó como una conquista de los demócratas, como la oportunidad para que unos pocos centenares de presos políticos abandonaran la cárcel y se normalizara su situación. Pero la citada ley dice en su Artículo Segundo, inciso f) que están comprendidos en la amnistía: «Los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas». Eso quiere decir, básicamente, que todos los funcionarios del Estado que cometieron violaciones de derechos humanos durante los años de la dictadura quedaban impunes y libres de todo cargo. Pero lo más difícil es tratar de entender cómo los partidos cuyos militantes habían sido perseguidos, torturados y, en algunos casos, asesinados por la dictadura, habían aprobado la impunidad y el punto y final para los responsables de tales delitos. Algo que esperemos que algún día nos expliquen los responsables y protagonistas de aquel proceso político.

Lo que ocurrió en ese momento es que los partidos mayoritarios de la izquierda española comenzaron, con la aprobación de esa ley, la construcción de un olvido que ha comenzado a evaporarse en los últimos años, y no precisamente por su voluntad o su esfuerzo.

A menudo las cosas pequeñas sirven para explicar acontecimientos grandes. Eso es lo que en cierto modo ha ocurrido con el actual proceso

de recuperación de la memoria histórica que ha iniciado la sociedad civil en los últimos años. En octubre del año 2000, en la carretera de la localidad leonesa de Priaranza del Bierzo, un grupo de arqueólogos, forenses y voluntarios comienzan a cavar una fosa común. En ella se encuentran los restos de trece hombres republicanos, civiles, que murieron asesinados por un grupo de pistoleros falangistas, el 16 de octubre de 1936. Entre ellos se encontraban los restos de mi abuelo paterno, Emilio Silva Faba, un militante de Izquierda Republicana, cuyo principal objetivo político era la apertura de una escuela pública y laica en su pueblo, donde hasta entonces sólo existían escuelas religiosas.

Los técnicos, voluntarios y familiares que estaban abriendo esa fosa común no podían ser conscientes de que estaban pinchando el globo del olvido. Durante los dos fines de semana en los que se desarrolló la excavación, numerosos familiares de mujeres y hombres republicanos, desaparecidos durante la Guerra Civil y la posguerra, se acercaron hasta aquel lugar para pedir ayuda y poder encontrar algún ser querido del que nada habían vuelto a saber tras su detención. En algunos casos, se trataba de mujeres octogenarias que veían en aquel pequeño hecho la posibilidad de morirse habiendo enterrado dignamente a un padre o un hermano. También ellas, sin ser conscientes, estaban reclamando el final del olvido y la impunidad. Y no lo estaban haciendo ante una institución. No lo estaban haciendo ante alguno de sus representantes políticos. Lo estaban haciendo junto a una cuneta en la que estaba siendo desenterrada nuestra historia, nuestra memoria, un recuerdo que la dictadura había erradicado de los espacios públicos y que el regreso de la democracia había hecho permanecer en la esfera de lo privado, sin construir los cauces que convierten la memoria privada en algo colectivo. En aquella cuneta comenzó a socializarse la historia de esos desaparecidos, y ese encuentro, esa red pública compuesta de historias privadas, llevó a la creación de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).

En el inicio de ese proceso de hilvanar memorias privadas para construir una memoria pública, nos dimos cuenta de que los grandes medios de comunicación españoles no estaban por la labor de facilitarnos el acceso a ese espacio que podía ponernos en contacto con miles de personas afectadas por el mismo problema. El primer reportaje televisivo sobre las fosas comunes lo emitió la televisión pública alemana, la ARD, dentro de un documental sobre los veinticinco años de la muerte

de Franco, elaborado por el periodista Thomas Kreutzman. Inmediatamente, otros medios extranjeros se interesaron por el tema. Muchos corresponsales nos explicaban que de alguna manera no entendían la relación de la sociedad española con ese pasado y estaban «esperando» a que ocurriera algo con él.

Al comienzo de nuestra labor consideramos que era fundamental la difusión mediática. Desde que en diciembre de 2000 legalizamos la ARMH, concentramos buena parte de nuestra labor en la difusión. De hecho, antes de la primera exhumación en Priaranza, yo publiqué un artículo en el periódico *La Crónica* de León que fue fundamental para la búsqueda de mi abuelo. El texto, que apareció publicado el domingo 8 de octubre de 2000, se titulaba «Mi abuelo también fue un desaparecido». En él yo contaba la historia de su asesinato y afirmaba no entender que en un país en el que amplios sectores políticos y sociales se habían volcado con la detención en Londres del dictador Augusto Pinochet, no se hiciera nada por la búsqueda de miles de desaparecidos en cunetas y caminos.

Pero no fue hasta julio del año 2002 cuando conseguimos romper ese silencio mediático y llevar las historias de esos desaparecidos a todos los rincones del país. A partir de ese momento numerosas familias se pusieron en contacto con nosotros, y comenzaron a surgir asociaciones similares en todo el territorio. Y se puso en marcha lo que comienza a denominarse «la generación de los nietos»; una generación que no participó en los pactos de la transición, que tiene bastantes referencias de lo que fue la dictadura franquista, que heredó en cierto modo las consecuencias de haber pertenecido a una familia republicana y que no tiene miedo a defender públicamente la memoria de sus ancestros.

También fue en agosto de 2002 cuando acudimos al Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos para reclamar ayuda y forzar al Gobierno español a cumplir la Resolución 47/133 de 18 de diciembre de 1992, por la cual los Estados miembros de la ONU se comprometen a erradicar la desaparición forzada. Finalmente el Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzada dictó una resolución en la que se afirmaba que no podía aceptar los casos posteriores al 24 de octubre de 1945, fecha de creación de la ONU; una resolución que consideramos especialmente injusta, porque una persona desaparecida en 1938 que no ha aparecido, lo continúa siendo en 1945, en 1950 y en el año 2000. De todas formas, el Grupo de Trabajo reclamó en noviembre de 2002 al

Gobierno español a dos desaparecidos en los años 1947 y 1949 sin que hasta ahora el Gobierno español haya ofrecido una respuesta aceptable para el Grupo de Trabajo.

El impacto social generado por las exhumaciones y la realidad de los desaparecidos llevó a la Comisión Constitucional del Parlamento español a condenar por primera vez y por unanimidad la dictadura franquista, el 20 de noviembre de 2002; una condena que simbólicamente representaba un punto de inflexión en la relación de la sociedad española con su pasado y que había tardado 27 años en ocurrir desde el final de la dictadura.

Según nos fuimos adentrando en las labores de recuperación de la memoria histórica, comenzamos a mirar a otros países. Alemania ha sido para nosotros un claro ejemplo de cómo se deben asumir las responsabilidades de los actos cometidos en el pasado; no sólo por la forma en que el Gobierno ha tomado medidas reparadoras, sino por el permanente debate que se desarrolla en el seno de su sociedad y el nivel de autocritica que al respecto desarrolla la clase política.

Cuando nosotros llevamos a cabo la primera exhumación, invitamos a los embajadores de Alemania e Italia a acudir a la misma y hacer algún tipo de acto simbólico, por la ayuda que prestaron al dictador golpista Francisco Franco y que muchas veces se tradujo en la muerte de miles de españoles, en especial población civil que murió bombardeada por sus fuerzas aéreas. Hay que tener en cuenta que el 1 de octubre de 1938, Franco concedió la máxima condecoración a Adolf Hitler y a Benito Mussolini «por su generosa amistad». La respuesta por parte de las embajadas siempre ha sido la misma: «No queremos intervenir en la política interior española». Pero nosotros conservamos la esperanza en que un canciller alemán realice algún gesto simbólico al respecto.

También tenemos una gran referencia en el proceso que se está llevando a cabo en Argentina; un país que salió de una cruenta dictadura, con una Ley de Punto Final similar a la Ley de Amnistía española y que en los últimos años está conquistando un nivel de justicia que estamos convencidos de que fortalecerá su democracia y no dejará suspendidos los derechos de miles de víctimas, que se están incorporando a la vida y la política públicas.

Pero en España la relación ha sido especialmente complicada con la clase política. Durante los primeros años que desarrollamos nuestra labor, el Gobierno de José María Aznar aseguraba no preocuparse del

tema porque la sociedad española había decidido mirar hacia el futuro. Pero mientras difundía esa afirmación, el Gobierno del Partido Popular estaba subvencionando a la Fundación Francisco Franco y dando dinero a la fundación alemana Volksbund para que se encarguen de exhumar y cuidar los restos de los españoles que formaron parte de la División Azul, y que lucharon junto al ejército nazi en el frente soviético.

El Gobierno del Partido Popular se negaba a cualquier reparación relacionada con las víctimas del franquismo. Aunque no tenga que ver, muchos de sus ministros y dirigentes estaban directamente emparentados con autoridades de la dictadura franquista. Incluso el presidente Aznar, en el verano de 2003, afirmó públicamente que una de sus lecturas de verano sería un libro que ha representado el revisionismo que exculpa a Franco de su responsabilidad en el inicio de la Guerra Civil.

Es cierto que a raíz de la labor de nuestra asociación, como asegura el historiador Paul Preston, se ha puesto en marcha en España un movimiento revisionista que trata de modernizar y volver a difundir la versión franquista de la Guerra Civil. En el documental de Montserrat Armengou *Las fosas del silencio* aparece una misa que se celebra los primeros miércoles de cada mes en Madrid, en honor de los muertos franquistas de la Guerra Civil. Los reporteros entrevistan a una mujer a la que preguntan por el movimiento que se ha iniciado para la búsqueda de los republicanos desaparecidos. Y la mujer responde: «Esto que están haciendo es una campaña orquestada por el diablo. Lo están estropeando todo. Nosotros que ya les habíamos perdonado». Al margen de que nadie ha pedido nunca perdón públicamente en nuestro país, la frase que realmente llama la atención es: «Lo están estropeando todo». Con ella, esa mujer está manifestando, desde una posición que defiende claramente el franquismo, que todo estaba arreglado, que el silencio edificado o solidificado en la transición era para ellos una solución.

Desde que el PSOE está nuevamente en el poder, las cosas han cambiado. El 23 de julio de 2004 en un Consejo de Ministros celebrado en la ciudad de León, donde el abuelo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero fue fusilado por su defensa de la legalidad republicana, el Gobierno anunció la creación de una Comisión Interministerial para el Estudio de las Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura Franquista. Dicha comisión se ha reunido con cerca de 40 asociaciones de todo tipo para conocer qué es lo que demandan. Y a partir de ese momento elabo-

rá un informe en el que se concentrarán las políticas de memoria que quiere llevar a cabo.

Pero lo que se va conociendo con respecto a la labor de la Comisión no parece muy esperanzador. El fantasma de la legislatura del socialista Felipe González, en la que prácticamente no se tomó ninguna medida al respecto, puede muy bien sobrevolar la actual legislatura socialista, después de que se haya conocido públicamente que la Comisión tiene previsto la reparación de los republicanos y franquistas, equiparando de ese modo a los que defendieron un Gobierno elegido democráticamente con los que destruyeron esa democracia y construyeron una sangrienta dictadura durante cerca de cuatro décadas. La ecuanimidad con respecto a la memoria de la Guerra Civil y de la dictadura franquista es una nueva forma de negar los derechos y el reconocimiento público de los hombres y las mujeres que defendieron el Gobierno elegido democráticamente en unas elecciones celebradas apenas cinco meses antes del golpe militar del general Franco.

Durante los más de treinta años transcurridos desde que terminó la dictadura, miles de hombres y mujeres que defendieron la democracia y lucharon por el regreso de las libertades han muerto sin recibir ningún reconocimiento público. Ninguna institución se ha acordado de ellos, ni los ha tratado como en cualquier democracia de nuestro entorno se reconoce a quienes lucharon contra el fascismo.

El 24 de junio de 2005 nosotros organizamos, en la localidad madrileña de Rivas-Vaciamadrid, un homenaje a los republicanos y a las republicanas que construyeron nuestra primera democracia. Al homenaje asistieron como público cerca de 25.000 personas y 741 octogenarios que habían sobrevivido a la Guerra Civil. Se trató sin duda del mayor acto de reconocimiento realizado en España desde el regreso de la democracia. Y era especialmente emocionante ver a esos hombres y mujeres acudir a un acto que para muchos llegaba demasiado tarde. También era sorprendente ver que entre el público se encontraban miles de jóvenes de entre veinte y treinta años, a los que desde las instituciones no se les ha invitado a interesarse por ese período de nuestra historia.

Pero el movimiento por la recuperación de la memoria histórica supone un cambio social; un punto de inflexión en la larga marcha del olvido. La publicidad, que dedica muchos esfuerzos a detectar nuevos nichos de mercado, lo ha representado con un anuncio. Hace algún tiempo se anunciaba en la televisión española una colección de documentales

sobre la Guerra Civil y la Segunda Guerra Mundial. En el anuncio de la campaña televisiva podía verse a un anciano y a su nieto viendo el final de uno de los documentales. Cuando termina, el veterano mira a su nieto de reojo, en silencio, hasta que le pregunta: «Qué, ¿vas a salir con tus amigos?». Y el nieto, después de quedarse un segundo pensando, responde: «No, mejor me quedo y hablamos».

Ahí está representado ese cambio social que se manifiesta en otros ámbitos culturales; en los que se cristaliza este movimiento por la recuperación de la memoria. Casos como la película de la directora Patricia Ferreira *Para que no me olvides*, en la que se cuenta la historia de un nieto que secretamente recupera la historia de su abuelo; o la emocionante obra de teatro *Soliloquio de grillos*, de Juan Copete, en la que se cuenta la historia de tres mujeres desaparecidas en la Guerra Civil y que ha sido finalista del Premio Max de Teatro.

La labor que estamos llevando a cabo desde nuestra asociación tiene diferentes planos y objetivos. Existe un plano más básico y emocional, que es el de ayudar a muchas personas a reparar un duelo suspendido, una situación angustiante para las familias que no han podido manifestar públicamente su dolor y en las que pervive la angustia por el hecho de que un ser querido no se encuentre enterrado «como es debido». En ese sentido se podría analizar nuestra labor como una terapia colectiva, que como sociedad no hemos hecho; la superación de un síndrome post-traumático que no ha podido ser elaborado colectiva y correctamente. Hay que tener en cuenta que en algunos casos las familias saben dónde se encuentran las fosas comunes, y en otros muchos nosotros hacemos las primeras gestiones después de que hayan pasado más de treinta años desde el regreso de la democracia.

Existe un segundo plano en el que creemos que nuestra labor tiene que ayudar a generar una cultura de derechos humanos, algo que no se ha podido desarrollar suficientemente a causa del modo en que se hizo la transición. Son los peligros de la impunidad política, jurídica y social; no permiten generar mecanismos fundamentales en la cultura política de una sociedad, no permiten ejercitar los músculos de defensa de unas garantías cívicas que no deben estar delegadas en el Estado, deben pertenecer a la esfera de lo social.

La recuperación de esa memoria y su implantación social puede ayudarnos también a romper ciertos hábitos sociales que permanecen activos y que fueron costumbre o son consecuencia de los cuarenta años

de dictadura. El período de la Segunda República ha sido para España la última y casi única gran oportunidad de construir una sociedad civil emancipada de los poderes que durante siglos han negado e incluso perseguido el progreso. Los Gobiernos progresistas de ese período trataron de instaurar los principios de la Ilustración; acabar con el analfabetismo, separar la Iglesia católica del Estado, promover la igualdad de la mujer o tomar medidas políticas especialmente avanzadas para su tiempo como la legalización del divorcio o el aborto.

Los cuarenta años durante los que el dictador Francisco Franco trató de borrar personas e ideas relacionadas con esa República han dejado un lastre que todavía arrastramos. Hay que tener en cuenta que la gran masa intelectual que se desarrolló, formó y convergió con esa República, salió en su mayoría del país; y la sociedad española fue formada desde entonces por lo más gris, dogmático y afín al régimen que quedó en él.

Durante más de tres décadas la escuela franquista estuvo modelando una sociedad que trató de convertir en un reflejo de los principios del régimen, con Dios y la patria como máximos estandartes del nacional-catolicismo. El poso de todos esos años no se borra con una Ley de Amnistía y la celebración de elecciones. Mucho menos si no existe ninguna institución que denuncie públicamente la labor llevada a cabo por la dictadura y que trate de reparar sus daños.

Los años de silencio, de falta de debate y de políticas de memoria han hecho que pervivan en nuestra sociedad numerosos hábitos del franquismo: una Iglesia católica que disfruta de numerosos privilegios y que todavía se considera parte del Estado, interviniendo constantemente en la vida política del país o recibiendo millones de euros para su financiación; una derecha que no ha condenado abiertamente la dictadura y que ha asumido públicamente los argumentos de los nuevos revisionistas que culpan a la Segunda República de la Guerra Civil y le quitan la responsabilidad al dictador Francisco Franco.

También existen otros tipos de hábitos sociales: el uso de los medios de comunicación públicos que llevan a cabo los partidos políticos; la falta de pluralidad en los medios de comunicación; la carencia de una sociedad civil participativa, que se articule para trabajar por sus ideas, que intervenga en la realidad del país; o la existencia de una izquierda electoral que no se atreve a desplegar su identidad, como si todavía fuera sospechosa y perseguida.

Pero por suerte, en los últimos años se ha iniciado un proceso destinado a invertir estos términos. En muchos lugares de España se han puesto en marcha decenas de colectivos, que han iniciado una labor de recuperación de la memoria histórica: personas que han decidido abandonar el silencio y que buscan la verdad y la justicia. Ese proceso permite el regreso de muchos ciudadanos que hasta ahora sólo eran habitantes, incapaces de manifestar públicamente sus ideas.

Para entender lo que quiero decir, lo mejor es que ponga un ejemplo. En febrero de 2004 la asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía organizó unas jornadas en Sevilla. La primera ponencia la hizo la escritora Rosa Regàs. Cuando terminó su intervención un hombre pidió la palabra para darle las gracias. El hombre llevaba al cuello una bandera republicana y se emocionó tanto que le regaló la bandera a la escritora. Eso ocurrió un viernes por la tarde. El domingo por la mañana, antes de terminar las jornadas, se sirvió un café. Una chica de mi edad se acercó a mí. Me contó que era nieta de un desaparecido y que su madre nunca había hablado con nadie del asesinato de su padre. Y añadió que el día que comenzaron las jornadas y su madre vio al hombre con la bandera republicana, la miró con cara de pánico y le dijo: «¿Dónde me has traído?». Mientras ella me contaba esto, su madre llegó hasta nosotros y me saludó. Se trataba de una mujer de un pueblo importante de la provincia, que hasta ese día había pensado que era la única persona en su pueblo que había sufrido la desgracia de que le asesinaran a su padre. Pero en esa reunión había otras tres personas de su pueblo que habían vivido esa tragedia. Un año después, esa mujer, Antonia Para, que no hablaba con nadie de su historia, acudió al Homenaje a los Republicanos de Rivas-Vaciamadrid.

Es difícil predecir hacia dónde irá el movimiento por la recuperación de la memoria. Por ahora es algo creciente que está cambiando algunas cosas. Ha hecho que el tema entre en las agendas políticas y que instituciones locales y autonómicas comiencen a preocuparse por ella. Ha hecho que muchos y muchas supervivientes sientan un reconocimiento que hasta ahora no habían tenido. También hay mucha gente joven que comienza a conocer la verdadera historia de su país: la de los niños que les fueron secuestrados a las presas republicanas, la de los miles de presos políticos que fueron hacinados en campos de concentración, la de los miles de desaparecidos: la historia que forma parte de nosotros, pero que nos han obligado a olvidar.

En casi todos los países en los que estos movimientos se han puesto en marcha, no se han detenido. España tiene una situación específica. También es muy importante la ayuda exterior. Necesitamos todo el apoyo posible para construir una sociedad más justa sobre una sociedad que fue muy injusta.

Un día se acercó a la excavación de una fosa un minero. Traía una gran lámina de un artista gallego, Castelao, muerto en el exilio. Se trataba de uno de los dibujos de una serie del año 1937 a la que tituló *Galicia Mártir*. En el dibujo se veía a un grupo de hombres, civiles, con aspecto de vivir en un pueblo, que estaban echando unos cadáveres en una fosa común. Y debajo había una leyenda que decía: «No entierran cadáveres, entierran semillas». Nosotros estamos regando esas semillas. Si nadie lo impide, serán las raíces de un futuro mejor.